

La consulta plantea si resulta conforme con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la publicación del número de DNI en los listados definitivos de ayudas de acción social del Ministerio.

En la convocatoria de ayudas sociales habrá de fijarse los requisitos para obtenerlas y también deberá figura el modo en que se proceda a la notificación de su concesión, por lo que al no especificarse en la consulta los términos de la convocatoria, efectuaremos tan sólo una respuesta genérica.

Como punto de partida es preciso señalar que la comunicación planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.”

Tal y como indica el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

No obstante, el artículo 11.2 dispone que “El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

- a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
- b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
- c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de

terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.”

De las excepciones previstas en el apartado segundo del artículo 11, la única aplicable sería la prevista en el apartado c) “Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.”

Por tanto, si en la convocatoria pública se fijó que la publicación de los listados definitivos se efectuaría con el número del D.N.I., entendemos que dicha publicación resulta conforme con el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999 pues, los solicitantes de ayudas sociales al analizar los requisitos para la concesión de dicha ayuda en la convocatoria, conocerán el hecho de que la relación de beneficiarios se publicará con el D.N.I, lo que supone la aceptación de tal circunstancia.

Ahora bien, existen ayudas para las cuales los solicitantes deben consignar datos relativos a la salud, tal como los define el artículo 5.1 g) del

Reglamento de desarrollo de la LOPD que los define como “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética.”

Respecto al tratamiento y comunicación de datos de carácter personal, cuyo régimen aparece recogido con carácter general en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, se encuentra, por vía de excepción, sometido a particulares restricciones en lo que a los datos de salud respecta, por el artículo 7 de la citada Ley Orgánica, cuyo apartado 3 establece como regla general que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”. Esta regla únicamente es matizada por la Ley Orgánica en sus artículos 7.6 y 8.

La especial protección conferida a los datos relacionados con la salud de las personas no es arbitraria, sino que resulta de lo dispuesto en las normas Internacionales y Comunitarias reguladoras del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. En este contexto, tanto el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, así como el artículo 6 del Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, ratificado por España en fecha 27 de enero de 1984, hacen referencia a los datos de salud como sujetos a un régimen especial de protección.

La Agencia Española de Protección de Datos ha puesto reiteradamente de manifiesto que la aplicación del artículo 7.3 implica, por mor del principio de especialidad, determina la imposible aplicación a los datos referidos en el mismo de cualquiera de las causas legitimadoras de cesión inconsentida previstas en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica, quedando limitados los supuestos habilitantes del tratamiento y cesión de estos datos a los establecidos en la norma especial o a aquéllos en los que la norma general se

refiere expresamente a tales datos (como sucede en relación con los datos de salud en el artículo 11.2 f) de la Ley Orgánica 15/1999).

Lo anteriormente señalado nos lleva a afirmar que sí la publicación de los beneficiarios con el D.N.I, sí se refieren o aparecen datos de salud de éstos, deberá constar el consentimiento expreso para su publicación.

De todo lo expuesto podemos concluir que, si en la convocatoria de acción social se indicó que la lista de los beneficiarios sería publicada con el número del D.N.I, dicha publicación resulta conforme con el artículo 11.2 c) la Ley Orgánica 15/1999, salvo que se publicasen junto con el D.N.I datos de salud en cuyo caso será necesario el consentimiento expreso de los beneficiarios.

Si por el contrario en la convocatoria de la acción social no se indicó el modo en que la misma se publicaría, se necesitará el consentimiento de los beneficiarios para publicar el listado con el D.N.I.